

Sebastián F. Villamizar Santamaría
Candidato a Doctor en Sociología – City University of New York Graduate Center
Ganador Premio Manuel Chiriboga 2020
Traducción propia para el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural-Rimisp

Hacer urbano lo rural: Dinámicas interclase para la protección del ambiente en el campo colombiano

Por. Sebastián F. Villamizar Santamaría

CAPÍTULO UNO - Urbanizar las montañas

Más que una frontera física, las altas montañas andinas que dividen la capital colombiana de Bogotá y el pueblo rural de La Calera actúan como una frontera mental entre la ciudad y la naturaleza. Desde la capital, estas montañas de color verde oscuro, que albergan los ecosistemas alto andinos, parecen una visión citadina de la naturaleza “prístina” con poca evidencia de intervención humana. Sin embargo, desde el otro lado, la capa de bosque espeso sólo cubre las cimas de las montañas, y al desplazar la mirada unos metros más abajo se descubren densos bosques que dan paso a grandes pastizales, campos agrícolas y, lo más llamativo, casas (véanse las figuras 1.1 y 1.2). Mientras que algunas se parecen a las casas campesinas tradicionales de la zona —un solo piso, paredes de adobe, techos de tejas, ventanas pequeñas, cercas de alambre de púas—, otras señalan la presencia de una clase social muy diferente: propietarios que prefieren dos pisos, paredes de cemento, techos impermeables, ventanas grandes y “cercas vivas” con plantas de Eugenia y pinos. La coexistencia de estos diferentes estilos arquitectónicos refleja un paisaje residencial mixto poco común, que es difícil de encontrar en América Latina, especialmente en Colombia, donde las clases sociales tienden a vivir separadas unas de otras, en áreas diferentes del mismo distrito o ciudad.



Figura 1.

La huella urbana de Bogotá (a la izquierda, en gris) y los límites de las veredas de La Calera (a la derecha, en amarillo), divididos por los Andes (la franja verde oscura del centro). Mapa realizado por el autor a partir de Google Maps (2018).



Figura 2.

Una vista general de la zona rural de La Calera que muestra el bosque andino en las cimas de las montañas junto con los usos agrícolas y residenciales del valle. Bogotá está detrás de las montañas a la derecha. Foto del autor, junio de 2019.

América Latina es la región más urbanizada del mundo, en la que más del 70% de su población vive en ciudades (ONU Hábitat 2012; 2016). La población urbana de Colombia es aún mayor, con cerca del 80%, tras décadas de migración del campo a la ciudad de personas que buscan mejores oportunidades de trabajo y condiciones de vida, y como desplazados de su larga guerra civil. Sin embargo, una pequeña pero creciente tendencia opuesta de migración del campo a la ciudad está cambiando el paisaje del subcontinente, y el pueblo de La Calera es uno de los lugares que se está transformado por esta nueva migración. La transformación de las reservas naturales y los terrenos agrícolas en usos residenciales plantea un reto especial ante el cambio climático, por el cual la tierra, el agua y otros recursos ecológicos son cruciales en las estrategias de mitigación.

Además, esta transformación también plantea cuestiones de justicia medioambiental. La diferencia que se observa entre las casas tradicionales de los campesinos y las nuevas viviendas tipo chalet representa un paisaje socioeconómico mixto en el que se superponen diversas visiones de la naturaleza y el campo. Estas visiones se manifiestan en construcciones materiales y escenarios políticos, que afectan a la forma en que se desarrolla la tierra y el agua, complejizan los procesos de toma de decisiones e influyen en el cambio de uso del suelo. En particular, estos efectos se experimentan en lugares de alto valor ecológico como los Andes, donde personas de diferentes clases viven ahora unas junto a otras.

Los antiguos habitantes de las ciudades se trasladan a La Calera para vivir en la “naturaleza”, para recrear su vida urbana en espacios verdes, pero lejos de la contaminación tóxica de la ciudad. Son en su mayoría de clase alta y media-alta, construyen sus casas en las zonas más cercanas a la ciudad para poder desplazarse con facilidad y creen que pueden hacerlo sin comprometer el entorno “verde”. En esto se parecen a los exploradores coloniales que creen haber encontrado la “naturaleza salvaje” y a los gentrificadores urbanos que se mudan a un barrio por su autenticidad, pero en este caso la autenticidad es el paisaje ecológico.

Estos recién llegados de la ciudad al campo llegan a un lugar que ya estaba poblado. Sus vecinos “de toda la vida” son campesinos y descendientes de los trabajadores de las minas que han llamado a este lado de la montaña su hogar durante generaciones. Los residentes de toda la vida utilizan la naturaleza para extraer valor de la agricultura o el

turismo; viven *de* la naturaleza. Los recién llegados, sin embargo, extraen valor de la estética de la naturaleza; viven *en* ella. Alguien con afinidad por la ecología política vería un conflicto potencial entre los diferentes usos de la naturaleza que prefiere cada grupo: los recién llegados se centran en el consumo de la naturaleza, mientras que los veteranos están más interesados en utilizarla para la producción. Al mismo tiempo, una persona familiarizada con la gentrificación también vería señales de discordia: una clase social más alta que se traslada a una zona que antes era de clase baja, con efectos en los mercados del suelo, posibles desplazamientos y conflictos entre vecinos. La cuestión básica es cómo se distribuyen los privilegios medioambientales, quién los utiliza y cómo, y quién lo decide. En La Calera, más que decidir quién soporta los males ambientales de este proceso, la cuestión es quién se queda con los bienes ambientales y para qué.

Sin embargo, lo que encontré después de pasar muchos meses en La Calera no fue una historia de conflicto sino una historia de creación de coaliciones. A pesar de las diferencias de clase y las tensiones sobre el uso de la naturaleza, dos circunstancias permitieron a los recién llegados y a los que llevan mucho tiempo en la zona desarrollar una profunda red de interacciones y coaliciones. En primer lugar, quieren proteger el medio ambiente. Los residentes de ambos grupos quieren agua limpia, paisajes verdes protegidos y poder de decisión en los debates sobre medio ambiente y planificación urbana. Los residentes veteranos y los recién llegados utilizan argumentos medioambientales para impedir un mayor desarrollo residencial y exigen que el Estado haga cumplir las políticas medioambientales.

En segundo lugar, luchan contra un enemigo común: el Estado. Pero el Estado tiene muchas caras, y sería simplista pintarlo como el villano de la historia. Actúa a la vez como guardián del medio ambiente —mediante leyes que protegen los ecosistemas— y como depredador —que concede licencias de construcción a grandes industrias y complejos inmobiliarios en las zonas que debería proteger.

Ante esta duplicidad, los residentes de ambos grupos se unen en diferentes situaciones para exigir que el Estado haga cumplir las políticas medioambientales existentes y satisfaga sus necesidades de infraestructura básicas y espacios verdes públicos. Los residentes no desarrollan soluciones privadas ni se retiran de la política. Por el contrario, exigen poder para elaborar planes oficiales que detengan el crecimiento urbano. Utilizan sus preocupaciones

ambientales y ecológicas como vehículo para forjar coaliciones frente a un Estado que tiene fuertes regulaciones ambientales y débiles mecanismos de aplicación.

La posición de La Calera en una ubicación periurbana es un buen indicador de los efectos socio ambientales del cambio de antiguos terrenos agrícolas y protegidos a usos urbanos, especialmente ante el cambio climático. Siguiendo el llamado del científico social Roger Keil (2018) a diversificar lo que entendemos por estas configuraciones espaciales periurbanas, veo una gran necesidad de definir una nueva forma de observar y describir las periferias urbanas latinoamericanas. La mayoría de los estudios sobre las periferias de las ciudades de la región se han centrado en el desarrollo de asentamientos informales establecidos por personas que vienen del campo sin empleo ni capital. Estos asentamientos adolecen de falta de infraestructura y de una alta estigmatización, y los ocupantes informales desarrollan fuertes relaciones con los partidos políticos en lo que respecta a la limpieza o la regulación de los tugurios (véase, por ejemplo, Álvarez Rivadulla y Bocarejo 2014; Murphy 2015; Arboleda 2016; Álvarez Rivadulla 2017). Sin embargo, La Calera y un número cada vez mayor de ciudades en toda la región no son en absoluto asentamientos ilegales. Las ciudades y pueblos de otras partes de América Latina y de todo el sur global muestran que las zonas periurbanas son diversas y complejas. Socialmente, pueden combinar diferentes clases, y económicamente, podrían combinar usos agrícolas, industriales y residenciales (Ren En prensa; Cowan 2019; Vij et al. 2018; Heinrichs y Nuissl 2013; Gonçalves y Pilo 2017; Colombijn y Kusno 2017). La combinación de clases sociales y usos del suelo de La Calera sugiere una urbanización más variada del campo latinoamericano que requiere un estudio más profundo.

Algunos estudiosos de América Latina llaman a este proceso “rururbanización” (Barros 1999; Bayón Jiménez 2016; González-Domínguez, Thomé-Ortiz, y Osorio-González 2018; Nates Cruz y Velásquez López 2019; Sánchez-Torres 2018), y enfatizan el carácter intermedio de esta expansión urbana. Para ellos, la creciente urbanización del campo desencadenada por la migración de las clases medias-altas encarna un proceso que simultáneamente puede asumir muchas formas, incluyendo la suburbanización (en su escala geográfica) y, más importante, la gentrificación rural (en sus diferencias de clase). Las investigaciones anteriores destacan la clase social, la separación y la exclusión: los recién

llegados más acomodados pueden utilizar su capital social, cultural y económico para desarrollar infraestructuras como tuberías de agua potable para ellos mismos, y no siempre compartirlas con la población más antigua. Los investigadores también ven la influencia del gran capital en la construcción de complejos de viviendas sociales a gran escala en detrimento de los usos agrícolas. Pero La Calera es diferente. Lo que encontré ahí añade una pieza que faltaba a nuestra comprensión de la migración de la ciudad al campo. Lo que en otros lugares son fuentes de conflicto, aquí se convierten en oportunidades para las coaliciones interclase y medioambientales. En La Calera, los dos grupos residenciales se unen en la participación en reuniones comunitarias, en la construcción y el mantenimiento de la infraestructura medioambiental y en la adopción de medidas legales para exigir al Estado que preste los servicios que ambos necesitan. Estos objetivos compartidos permiten a estos grupos trabajar juntos contra el Estado.

Esta tesis muestra en qué circunstancias personas de diferentes clases pueden, a pesar de sus diferencias, construir coaliciones de conveniencia en sus demandas para proteger la naturaleza frente a una mayor expansión urbana. Concretamente, estudia cómo los vecinos de La Calera utilizan el objetivo de proteger el ecosistema y el paisaje, tanto material como simbólicamente, como terreno común para plantear demandas al Estado sin la mediación de partidos políticos o manifiestos ideológicos. Examino cómo los vecinos interactúan entre sí y con el Estado para negociar un entendimiento común del medio ambiente, cómo esa negociación se ve favorecida cuando el Estado enmarca los recursos naturales como escasos a pesar de su abundante disponibilidad, y lo que un pueblo rural de Colombia puede sugerir sobre las oportunidades de establecer relaciones más igualitarias en espacios desiguales.

La naturaleza es su vecino

En los últimos treinta años, La Calera ha recibido una afluencia de residentes de clase alta y media-alta, casi todos procedentes de Bogotá, la capital y ciudad más grande de Colombia. La mayoría busca la “naturaleza”. Esta búsqueda está mercantilizada por los promotores inmobiliarios y los vendedores de terrenos, y tiene su mejor representación en una valla situada en la carretera principal que conecta la capital colombiana con el pueblo (véase la figura 1.3). El anuncio de un nuevo conjunto cerrado muestra la imagen de un pájaro

amarillo y afirma: “Un nuevo vecino le da la bienvenida: su vecino, la naturaleza”. La promesa de esta urbanización de élite que vende casas de campo y lotes es que los compradores podrán vivir alejados de la ciudad, en montañas verdes, con casas rodeadas de una “naturaleza” domesticada, prístina y vecina. Los nuevos residentes disfrutarán de los cantos de los pájaros, del aire limpio y de hermosos paisajes andinos que podrían convertirse en un oasis alejado de la vida de la ciudad, lo cual representa una versión sudamericana de lo que el geógrafo Neil Smith (2008) llamó la “ideología burguesa de la naturaleza”. Y con ello, encontrarán una sensación de calma y tranquilidad que sólo existe fuera de la ciudad.



Figura 3. Una valla en la carretera de La Calera. Foto tomada por el autor, 2016.

El uso del suelo en La Calera refleja esa idea de naturaleza prístina. Cerca de dos tercios del territorio montañoso de La Calera son rurales (64%) y un tercio consiste en terrenos protegidos como reservas naturales y otras zonas de conservación (35%). El suelo oficialmente designado como “urbano” —el pueblo propiamente dicho— representa menos del 1% de la superficie del municipio (0,98%). La mayoría de los recién llegados han construido sus casas en esa vasta extensión de terreno rural, donde esperan sentirse cerca de la naturaleza que vende la valla publicitaria. Debido a esta migración de lo urbano a lo rural,

el número de personas que llegaron desde Bogotá en los cinco años anteriores se duplicó: pasó de 894 en 2005 a 2010 en 2018, lo que supone un aumento del 7,3% al 14,4% de la población total de La Calera.

Pero lo que la valla de ese conjunto cerrado ignora es que ya había vecinos de larga data en el municipio. La población residencial estaba compuesta en su mayoría por campesinos y antiguos trabajadores de una empresa cementera que extraía los ricos yacimientos de piedra caliza de la zona. Estos veteranos habían vivido en la zona durante generaciones, y eran propietarios de la mayor parte de las tierras rurales de La Calera. Junto con los pájaros, serían los otros vecinos de los recién llegados, pero no fueron anunciados como tales por los promotores inmobiliarios que colocaron la publicidad.

La distinción entre estos grupos no sólo tiene que ver con el tiempo de residencia en La Calera, sino que también implica una diferencia de clase. Aunque no hay ninguna encuesta representativa en Colombia que pregunte por los ingresos o la ocupación en esta zona, el censo incluye el nivel educativo, que es una buena aproximación de clase, especialmente en un país tan desigual como Colombia. Según la tabla 1.1, en 2005, el 70% de las personas de 18 años o más que vivían en las zonas rurales de La Calera había completado el bachillerato o menos, frente al 18% que tenía un título universitario o superior. Estas cifras cambiaron considerablemente en 2018, cuando sólo cerca de la mitad de la población (52%) estaba en el primer grupo y la tasa de educación universitaria casi se duplicó (34%). Estos cambios podrían ser el resultado de una mejor cobertura educativa en general, pero la población con mayor nivel de estudios en 2018 realmente habla del aumento de los recién llegados de clase media-alta que se han trasladado a La Calera en los últimos años. Esta composición polarizada de la población es familiar en los barrios urbanos en proceso de gentrificación.

Tabla 1. Porcentaje de la población de 18 años o más que vive en zonas rurales según nivel de estudios. La Calera, 2005-2018.

	2005	2018
Bachillerato o menos	70%	52%
Pregrado o superior	18%	34%

Fuente: Cálculos propios basados en DANE (2005, 2018).

Pero a diferencia de las reivindicaciones sobre la autenticidad cultural de un barrio, que están en el centro de muchas narrativas de gentrificación urbana (Zukin 2010), La Calera es un ejemplo de gentrificación rural en el que las reivindicaciones sobre la naturaleza “auténtica” se convierten en una motivación clave para las luchas por el espacio. Mientras que la “naturaleza” puede definirse para los habitantes de larga data en términos de producción —como fuente de ingresos derivada de la agricultura y la ganadería—, los recién llegados definen la naturaleza en términos de consumo: se sienten atraídos por La Calera por sus valores estéticos. En las zonas urbanas, el uso de los discursos “verdes” se orienta a la recuperación de áreas previamente contaminadas o neutras, donde el Estado y los intereses privados hacen limpiezas, construyen parques y dan paso a edificios de apartamentos de lujo que desencadenan la gentrificación (Gould y Lewis 2016). La mayoría de estas transformaciones enfrentan a los recién llegados “concientes del medio ambiente” con los vecinos “inconcientes del medio ambiente” de toda la vida, pero en pocos casos, ambas poblaciones pueden encontrar un terreno común para recuperar los espacios verdes y evitar el desplazamiento de los antiguos (W. Curran y Hamilton 2017). Se sabe poco sobre cómo ocurren estos procesos en las zonas rurales; en La Calera, los habitantes de larga data y los recién llegados se unen para preservar la naturaleza y mejorar las condiciones de vida de todos contra un tercer actor: el Estado.

Los residentes han creado coaliciones en torno a cuestiones clave que afectarán a La Calera en los próximos años. En el transcurso de mi trabajo de campo, se produjeron cuatro acontecimientos políticos clave: dos elecciones (una para presidente y senador, y otra para alcalde y concejal), el inicio de un megaproyecto para construir un parque cuatro veces más grande que el mayor parque de Bogotá, y el proceso participativo obligatorio para determinar el nuevo plan de ordenamiento municipal. Estas cuatro arenas políticas altamente contenciosas presentaron batallas no entre los dos grupos de residentes, sino más bien entre ellos y los gobiernos nacional y local. Observé cómo se formaban coaliciones entre los residentes cuando exigían al Estado que impidiera una mayor urbanización y aplicara la política medioambiental. Esta evolución sugiere posibilidades dinámicas de nuevas relaciones entre diferentes actores que quieren preservar el entorno natural en las zonas rurales en proceso de gentrificación que están creciendo en América Latina y en otras partes del mundo.

Continuidades urbano-rurales en América Latina

La Calera muestra cómo la preocupación por las desigualdades medioambientales puede unir a personas con posiciones de clase contrastadas en un contexto de creciente gentrificación rural. En Colombia, además, las zonas rurales han sido moldeadas por la guerra civil. La guerra afectó en mayor medida a las zonas rurales, lo que desencadenó una mayor migración del campo a la ciudad de las personas desplazadas de sus hogares por la violencia. En este contexto, resulta especialmente llamativo el inesperado movimiento de las ciudades al campo. Con ello, las ciudades se expanden y añaden antiguas zonas agrícolas en espacios que no son totalmente urbanos ni totalmente rurales.

Este caso puede ser analizado por diferentes marcos que hablan de los procesos multiescalares que ocurren en La Calera. Sustancialmente, es un caso de estudio de la expansión metropolitana donde las formas urbanas y los habitantes se apoderan de antiguas áreas agrícolas en lo que algunos estudiosos han llamado “urbanización planetaria” (Brenner 2014). Al mismo tiempo, también habla de un proceso de gentrificación rural por la llegada de nuevos habitantes de clase media-alta a una zona antes de clase baja ubicada en el campo. Además, el caso de La Calera se da en un momento de crisis ecológica por el cambio de antiguos terrenos agrícolas y protegidos a usos residenciales. Este enfoque en la naturaleza es especialmente importante en un país como Colombia, donde los líderes medioambientales son asesinados con regularidad y que incluso los niños de 11 años que hablan a favor del medio ambiente reciben amenazas de muerte (El Espectador 2021).

Pero el caso de La Calera también habla de un marco geográfico. La consecuencia no deseada del proceso de paz colombiano de 2016 de abrir los espacios rurales al “desarrollo” fue la expansión residencial en el campo —un movimiento que se ve no sólo en las periferias de Bogotá, sino también en otras ciudades como Medellín, Cali, Pereira, Santa Marta y Cartagena. Además, otros países de América Latina están experimentando expansiones urbanas similares en las que las barriadas periféricas se vuelven más elegantes debido a la búsqueda de la naturaleza por parte de los antiguos habitantes de las ciudades. Y, por último, La Calera se sitúa en un proceso emergente en todo el sur global en el que las ciudades crecen exponencialmente, lo cual transforma el antiguo suelo rural no sólo en usos residenciales,

sino también industriales o de transporte. En todas estas escalas diferentes, la preocupación por el medio ambiente está en el centro de los proyectos que tienen en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En este sentido, la ilustración de La Calera sobre la movilización de la naturaleza por parte de diferentes actores estatales y no estatales es clave para entender en qué circunstancias se forman coaliciones por motivos ecológicos.

Unas variedades de desarrollos periurbanos en América Latina cuestionan los límites entre los tipos ideales de lo urbano y lo rural como resultado del desborde urbano hacia el interior rural. Por ello, es importante entender estos espacios geográficos no como entidades distintas sino como etapas de un mismo proceso de urbanización, tal como lo explican sociólogos, geógrafos y antropólogos (Redfield 1989; Harvey 2014; Lefebvre 2014; Brenner 2014; Keil 2018; A. J. Scott y Storper 2014; Storper y Scott 2016). Tres corrientes de investigación intentan ir más allá de la dicotomía de lo urbano y lo rural y abordar el desbordamiento de las ciudades en zonas que antes eran “sólo rurales”: (i) los estudiosos latinoamericanos que trabajan en el concepto emergente de “rururbanización”; (ii) los estudios de suburbanización; y (iii) los pequeños pero sustanciales debates sobre las áreas rurales en los estudios de gentrificación.

En los tres procesos —urbanización, suburbanización y gentrificación rural—, los nuevos espacios son moldeados por los recién llegados que se encuentran con la naturaleza. En primer lugar, les motiva vivir “en la naturaleza”. Ven la ciudad como un lugar prácticamente carente de cualquier cosa “verde”. Esta antinomia sigue una tradición binaria, ciertamente en sociología, de pensar en las sociedades y espacios urbanos y rurales como fundamentalmente diferentes, incluso opuestos. Debido al rápido crecimiento de las ciudades en el siglo XIX en Europa, donde se escribió la mayor parte de la teoría sociológica clásica, estos pensadores se preocuparon por explicar las diferencias radicales en el comportamiento social y las normas culturales. Quizá las ideas más conocidas sean la distinción de Émile Durkheim (1984) entre solidaridad mecánica y orgánica, y la caracterización de Ferdinand Tönnies (1963) de *Gemeinschaft* (comunidad) y *Gesellschaft* (sociedad). En esencia, los esquemas de estos pensadores pretendían situar a las sociedades urbanas y rurales en extremos opuestos en cuanto a los vínculos emocionales y de apoyo entre los miembros de un grupo, sus identidades y sus formas de vida. Estas distinciones se tradujeron en el espacio,

donde la vida de la ciudad se opone a la vida rural, e incluso en cuentos populares como la fábula de Esopo de *El ratón de ciudad y el ratón de campo* (Jacobs 1894).

Debido a la violenta separación entre las solidaridades rurales tradicionales y las nuevas formas industriales urbanas de vida y trabajo, muchas sociedades del mundo se han formado una romantización de la naturaleza. Las ciudades son el lugar donde se encuentra el cemento, las carreteras, los edificios y la contaminación, mientras que el campo es donde reside lo “verde”: los pastos, los bosques, los campos agrícolas, el aire limpio. Esto contrasta con la visión, especialmente en América Latina, de que las ciudades son mejores que el campo, y la antinomia de civilización y barbarie se ve en términos espaciales: las ciudades son donde ocurre la modernización y donde la gente debe ir para abandonar una vida rural atrasada (Almandoz 2018). Esta visión dicotómica es aún más extrema en China (Jaros 2019; Willis 2020)

Sin embargo, la ecología política urbana y otras corrientes críticas de la sociología, la geografía y la antropología han cuestionado sistemáticamente esta dicotomía (Swyngedouw y Heynen 2003; Heynen, Kaika y Swyngedouw 2006), y argumentan que las ciudades no están desprovistas de naturaleza, sino que esta adopta muchas formas. Los parques (Newman 2015), las palomas (Jerolmack 2013) y las tuberías de agua que abastecen a los acueductos y sistemas de alcantarillado (Gandy 2014) son todos tipos de naturaleza que existen en las ciudades de Estados Unidos y Europa pero que, por una u otra razón, son ignorados o vilipendiados como sucios.

Las zonas periurbanas del sur, y en particular de América Latina, se han caracterizado a menudo como sucias porque han sido principalmente asentamientos informales (Alsayyad 1993; Audirac et al. 2012; Arboleda 2016). Debido a la dinámica de la urbanización en el subcontinente, que concentra los recursos en los centros de las ciudades, las periferias han sido mayormente pobladas por los migrantes más pobres del campo, lo cual crea oportunidades para la ocupación ilegal (Álvarez Rivadulla 2017) y otros tipos de informalidad en la tenencia de la tierra, las relaciones con los programas gubernamentales y la infraestructura (Fischer, McCann y Auyero 2014). Las periferias también están en desventaja en términos ambientales, con residuos tóxicos, alto riesgo ambiental y pobreza,

como los sociólogos Javier Auyero y Débora A. Swistun (2009) mostraron para Buenos Aires y que otros han encontrado también para Bogotá (Zeiderman 2016).

Pero ahora, los académicos latinoamericanos están estudiando lo que ocurre en la rápida urbanización del campo por parte de los participantes de clase alta en la migración de la ciudad al campo (Barros 1999; Arias 2002; Cabrera Montúfar 2012; Pallarès-Blanch, Prados Velasco y Tulla Pujol 2014; Tulla et al. 2017; Olvera Aguilar 2018). Dado que los recién llegados llegan a una zona poblada mayoritariamente por campesinos, estos académicos estudian los efectos en las interacciones entre ellos. Por ejemplo, en la zona rural de Tigre, cerca de Buenos Aires, la abogada de derechos humanos Pétalla Timo (2017) descubrió que los recién llegados de clase media-alta se beneficiaban de mejores bienes ambientales e infraestructuras en comparación con los pobres residentes de toda la vida. En otras partes de Colombia, los nuevos residentes de clase alta se beneficiaron de una ampliación de la red de infraestructuras, mientras que los de toda la vida no lo hicieron (Nates Cruz y Velásquez López 2019; Cardoso y Acosta Nates 2020). Esto recuerda los efectos de la gentrificación urbana, incluida la gentrificación “verde” por parte de investigadores en diferentes partes del mundo (Gould y Lewis 2016; W. Curran y Hamilton 2017; Anguelovski et al. 2019; Dooling 2009; Checker 2011; Rigolon y Németh 2019).

Otro enfoque proviene de la larga tradición de los estudios de suburbanización. En el norte global, las primeras migraciones fuera de la ciudad comenzaron alrededor de finales del siglo XIX —cuando las ciudades también crecían— y fueron realizadas principalmente por las élites que querían obtener un “sueño triple”, como lo llama la historiadora Dolores Hayden (2003): una casa, un patio y una comunidad. La mayor migración de las ciudades a los suburbios en Norteamérica se produjo a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, con un fuerte apoyo de los programas estatales de construcción de viviendas y carreteras, así como de los préstamos hipotecarios respaldados por el gobierno para los veteranos (Jackson 1985; Fishman 1987; Gans 1967). En un principio, este movimiento se consideró exclusivamente como una “huida de los blancos” hacia los suburbios, pero fue algo más diverso en términos de raza, como aclara el sociólogo Gregory Smithsimon (2012). Gran parte de la motivación de los residentes de los suburbios era acercarse a la naturaleza y disfrutar de una vida idílica lejos de la contaminación, una motivación que ha surgido

recientemente también en otras partes del mundo, como en México y Brasil (Herzog 2014), Sudáfrica o Indonesia (Keil 2013). Sin duda, y de nuevo como nos recuerda el trabajo de Keil, no todas las periferias urbanas son enclaves ricos — como lo demuestra fácilmente la *banlieue* francesa (R. Harris y Vorms 2017; Topalov 2017)—, pero volver a la naturaleza es un motor importante de los procesos de suburbanización contemporáneos alrededor del mundo.

En muchos países, las ciudades utilizaban las tierras de cultivo de sus alrededores para obtener alimentos, lo cual crea así una “grieta ecológica” en la que los espacios agrícolas se quedaban sin recursos y recibían los residuos de la ciudad (Foster 1999). Cuando países como Estados Unidos empezaron a experimentar la expansión metropolitana a mediados del siglo XX, gran parte de estas tierras de cultivo se transformaron en suburbios tras las diferentes políticas gubernamentales para desarrollar estas tierras (Hayden 2003). Al mismo tiempo, estos países empujaron las fronteras agrícolas hacia espacios más lejanos a nivel nacional o internacional, transformando a los países del sur global, y especialmente a América Latina, en una despensa global (McMichael 2015). Pero ahora que la despensa se está transformando en una casa, los espacios rurales en proceso de urbanización como La Calera presentan un panorama complicado con elementos tanto de suburbanización modelada en el norte global como de gentrificación rural.

Al igual que su homólogo urbano, la gentrificación rural también tiene como núcleo una apropiación del espacio basada en la clase. En sus términos más simples, este proceso implica la sustitución de una población de clase baja por un grupo de clase alta (Clark 2005). La gentrificación tiene consecuencias en las condiciones materiales, como el aumento del valor del suelo, así como en los patrones de consumo, ejemplificados por la sustitución de los comercios tradicionales por un nuevo ecosistema minorista que atiende a los gustos de la nueva población (Zukin, Kasinitz y Chen 2016; Tissot 2011; Smith 1987, 1979). A pesar de las importantes diferencias en los contextos espaciales y las consecuencias sociales (Lees, Shin y López 2015), los actores son siempre similares: dos (o más) grupos de residentes, promotores inmobiliarios y autoridades estatales fomentan o promulgan políticas favorables a la clase social más alta. En las “gentrificaciones latinoamericanas” (López-Morales, Shin y Lees 2016), el Estado desempeña un papel clave porque impone, a veces con violencia, políticas de “renovación urbana” alineadas con el capital privado y los intereses de los nuevos

residentes o las expectativas de los turistas e inversores extranjeros en lugar de las necesidades y deseos de los residentes de toda la vida (Janoschka y Sequera 2016; Janoschka, Sequera y Salinas 2014; Lederman 2020).

El idilio rural de espacios verdes y tranquilidad (Phillips 1993) que motiva a los urbanos a trasladarse a zonas alejadas del campo tiene efectos similares a los de la gentrificación urbana: un aumento del precio del suelo, un cambio en los gustos de consumo de los residentes y luchas por definir el futuro del espacio entre una población recién llegada y los residentes de toda la vida (Ghose 2013; Mamonova y Sutherland 2015). La mayoría de los estudios sobre la gentrificación rural se han centrado en los países del norte global, donde las disparidades de clase no son tan marcadas entre la clase media entrante y la clase media agrícola existente en estas zonas (Phillips 1993; 2002; Bell 1995; Cloke y Thrift 1987). Además, las diferencias económicas entre los agricultores y los recién llegados ricos también pueden quedar ocultas por los puntos comunes culturales, raciales o étnicos. Sin embargo, las zonas rurales de América Latina son significativamente diferentes.

En primer lugar, las zonas rurales de América Latina son muy pobres, y los campesinos se encuentran entre las posiciones más bajas del espectro de clases (Portes y Hoffman 2003). En Colombia, el 91,2% de la población rural vive en la pobreza o en riesgo de serlo (DANE 2020). Esta diferencia es importante porque cristaliza las ya muy desiguales relaciones de clase en la región, que en Colombia son tan crudas como toleradas, como muestra la socióloga María José Álvarez-Rivadulla (2014). Tener una composición de clase heterogénea en un mismo espacio es inusual en el subcontinente, lo que hace que estudiar la gentrificación rural aquí sea aún más interesante.

En segundo lugar, existe una importante distinción escalar entre las zonas rurales del norte y del sur. Aunque las ciudades del sur global tuvieron un crecimiento significativamente rápido en el siglo XX y la mayor parte de la población vive en ellas, las zonas periurbanas —incluido el campo— no están tan alejadas del núcleo urbano como en el norte global. Este punto es importante porque las zonas rurales en proceso de gentrificación del sur global no están tan alejadas geográficamente como sus homólogas del norte, lo que crea lugares para estudiar la complejidad de lo “rururbano”. La ubicación remota de la naturaleza rural y prístina en el norte es también el resultado de un proceso más largo de suburbanización que amplió las fronteras de la ciudad.

En resumen, estos tres procesos de urbanización del campo descritos por otros estudiosos —rurbanización, suburbanización, gentrificación rural— se superponen en La Calera. Este proyecto se centra en los efectos de esa superposición de categorías, espacios y actores, en arenas disputadas para apropiarse de la naturaleza.

Urbanización y tercera naturaleza

La naturaleza es la clave que une a todos los actores —antiguos residentes, recién llegados, Estado, promotores privados— en La Calera. Es lo que sustenta la vida de los antiguos mediante la agricultura y la ganadería; es la principal motivación para que los recién llegados se trasladen allí; y es lo que el Estado regula, protege y permite explotar. Sin embargo, como demuestran estos diferentes usos y contextos, la naturaleza tiene múltiples significados y puede ser utilizada por los actores de distintas maneras, incluso como mecanismos para una nueva e inesperada colaboración. Por tanto, es importante conceptualizar los papeles que puede adoptar la naturaleza en los procesos de urbanización.

Como mencioné antes, la oposición entre lo rural como “natural” y la ciudad como antítesis de la naturaleza es ingenua. La urbanización, en opinión del historiador William B. Cronon (1991), crea capas de naturaleza. Para él, la “primera naturaleza” es el ecosistema de un lugar: ríos, montañas, fauna, flora, clima. Se trata de los recursos disponibles en una zona que pueden ser útiles para las personas de muchas maneras diferentes, especialmente productivas. Cuando los humanos llegan allí, construyen intervenciones de “segunda naturaleza” para aprovechar esos recursos naturales tanto para el hábitat humano como para las ganancias de capital. Las personas remodelan la primera naturaleza mediante presas, por ejemplo, para canalizar las vías fluviales existentes para el transporte de mercancías en barco o para crear fuentes de agua para el consumo doméstico. El ejemplo de Cronon es la ciudad estadounidense de Chicago, que se desarrolló en una pradera que podía conectar fácilmente las mercancías y el dinero a través del ferrocarril con otras partes del país y del mundo. Los ricos suelos para la agricultura y las masas de agua existentes en esa zona (primera naturaleza) eran buenos para extraer valor financiero. Pero como estos ecosistemas podían desarrollar problemas por los cambios estacionales, los humanos construyeron una segunda

naturaleza sobre ellos —incluidos sistemas de canales y ferrocarriles— para mantener y aumentar ese valor económico.

La primera naturaleza de La Calera es abundante en recursos hídricos y de suelo, lo que ha sido la principal fuente de sustento de los habitantes de la zona desde la época colonial. Los habitantes de la zona explotaban carbón y madera para venderlos en Bogotá hasta principios del siglo XX; posteriormente, los yacimientos de piedra caliza fueron la principal fuente de explotación de recursos e ingresos para los habitantes de La Calera. Las intervenciones de segunda naturaleza incluyeron las carreteras para transportar las mercancías, así como un sistema de teleférico para transportarlas a la capital, pero hubo pocas intervenciones de infraestructura a gran escala para mejorar la calidad de vida de los residentes.

Este uso extractivo asociado a las ciudades de larga duración se basa en la idea de que las ciudades requieren recursos naturales de su interior, como señaló John B. Foster (1999) al hablar de la “grieta ecológica”. Tomando prestada la idea de Karl Marx de la grieta metabólica, Foster sostiene que las ciudades agotan los recursos de su periferia rural, lo cual crea un ciclo en el que las primeras pueden seguir creciendo y las segundas se explotan aún más. En América Latina, el rápido ritmo de urbanización se ha unido a dos macroprocesos que han creado un modelo específico de extracción de recursos del campo. Por un lado, existe una alta concentración de la propiedad de la tierra rural, lo que crea un fuerte sistema de desigualdad en las zonas rurales y sitúa a los campesinos en una de las posiciones más bajas del esquema de clases (Portes y Hoffman 2003). Por otro lado, la región también se convirtió en una especie de despensa global, donde las mayores actividades económicas en las zonas rurales son la agricultura y la extracción de recursos minerales que exportan recursos naturales a los países del norte global (McMichael 2012).

La relación entre la extracción de recursos, el crecimiento económico y los diferentes actores implicados en estos procesos se entiende mejor si se toma prestado el concepto de la “cinta de producción” (CDP) utilizado por sociólogos como Kenneth Gould, Allan Schnaiberg y otros en la sociología ambiental (Schnaiberg 1980; Schnaiberg y Gould 1994; Gould, Pellow y Schnaiberg 2008). Al igual que las capas de la naturaleza de Cronon, esta teoría sostiene que los recursos naturales son explotados por los seres humanos para obtener ganancias de capital. Y, al igual que la idea de Foster sobre la grieta ecológica, la CDP destaca

que la sobreexplotación de esos recursos para el crecimiento económico conllevará un mayor agotamiento de los “bienes” ecológicos y creará “males” ecológicos en un ciclo constante. Lo que añade esta teoría es el papel del Estado en este proceso, que puede actuar como facilitador de una mayor explotación sin límites, como gestor de los recursos o como protector del medio ambiente. La cinta de producción evoca la imagen de un bucle de retroalimentación en el que la extracción de recursos ecológicos conducirá a un mayor agotamiento y a una mayor explotación, todo ello en nombre del crecimiento económico, es decir, utilizar y ampliar aún más las intervenciones de segunda naturaleza para usar los recursos de primera naturaleza. Al mismo tiempo, las personas — pensadas como ciudadanos-trabajadores por la CDP— tienen un papel contradictorio al exigir al Estado que fomente el crecimiento económico (para mantener las oportunidades de empleo) pero también que cree protecciones medioambientales (para mantener la calidad de vida).

Sin embargo, con procesos como el asentamiento de nuevos pobladores urbanos en La Calera, partes del campo en América Latina se están volviendo más rentables para el desarrollo de viviendas que para las anteriores actividades agrícolas y mineras. Este tipo de desarrollo también está ligado a la explotación de la “naturaleza” —en forma de espacios verdes para paisajes y aire limpio- pero para el consumo y no para la extracción (Bosworth y Bat Finke 2020). Por lo tanto, es importante mantener la abundancia de naturaleza para maximizar las ganancias financieras del desarrollo de la tierra. Se trata de la misma lógica que en los programas de ecoturismo y conservación como REDD+, cuyo objetivo es proteger las tierras ricas en recursos de una mayor explotación económica (véase, por ejemplo, Ojeda 2012; Rocheleau 2015; Fairhead, Leach y Scoones 2012). En este caso, la primera naturaleza adquiere valor como lugar para vivir y, a su vez, se ve modificada por las intervenciones de la segunda naturaleza realizadas por y para los recién llegados. Más que una cinta de producción, existe una “cinta de consumo” (Wright 2004; Zehr 2015; D. Curran 2017), en la que los recursos explotados no ponen necesariamente en riesgo los recursos naturales, sino que crean desigualdades ambientales que permiten a las personas más ricas disfrutar de los bienes mientras dejan a los demás lidiar con los males. En este paisaje, los que llevan mucho tiempo en el país hacen hincapié en los valores de uso de la naturaleza (la tierra para cultivar, por ejemplo) mientras que los promotores se benefician de los valores de intercambio. Los

recién llegados disfrutan de los valores de uso mientras tratan de proteger su patrimonio para un posible valor de cambio futuro.



Figura 4. Un grafiti en La Calera urbana que representa la superposición de la primera y la segunda naturaleza para crear la tercera. Foto del autor, marzo de 2018.

En el caso de La Calera, los recién llegados quieren disfrutar de un paisaje de primera naturaleza con comodidades de segunda naturaleza, mientras que los más veteranos necesitan recursos de primera naturaleza para mantener sus medios de vida. Las relaciones sociales que se forman en torno a esta tensión entre usos y valores se entienden mejor como una “tercera naturaleza”. Por un lado, los recién llegados quieren preservar la naturaleza prístina, pero no quieren volver a una primera naturaleza “tosca” en la zona, un lugar sin carreteras ni tuberías. Por otro lado, los que llevan mucho tiempo en la zona siguen cultivando y criando ganado, pero también les preocupa la normativa medioambiental que podría impedirles ganarse la vida. Estas posiciones son puntos intermedios que crean una tercera naturaleza, en la que pueden coexistir, superponerse o cambiar al mismo tiempo diferentes capas de la naturaleza (véase la figura 1.4).

Otros estudiosos han utilizado la “tercera naturaleza” para hablar de estas capas simultáneas. Por un lado, los investigadores en geografía utilizan este término para referirse a los esfuerzos de conservación que intentan mantener la primera capa de naturaleza de un área mediante la intervención humana, como leyes o reglamentos, por ejemplo, las reservas naturales (Hughes 2005; Brooks et al. 2011). Por otro lado, como sugiere la antropóloga Anna Tsing (2015), la creación de la tercera naturaleza es un proceso más complejo porque los humanos y los no humanos se moldean e interactúan continuamente entre sí. Ella muestra cómo la intervención humana en el cultivo y consumo de hongos tiene consecuencias ecológicas que crean problemas que deben ser resueltos por más intervención para seguir creciendo y consumiendo, lo cual un ciclo repetitivo: una cinta de producción. Esta concepción abre un espacio para entender la relación entre el ser humano y el medio ambiente como una relación más interactiva; en lugar de ser un depósito pasivo para la intervención humana mediante la extracción o la protección de los recursos, la naturaleza adquiere un papel más activo.

Utilizo la idea de la tercera naturaleza para entender cómo el medio ambiente y las personas en La Calera forman una relación activa y recíproca. En lugar de un proceso lineal y cronológico, la intervención humana (segunda naturaleza) coexiste de forma más explícita con el medio ambiente (primera naturaleza) en diferentes contextos. La tercera naturaleza, a su vez, engloba el modo en que las ideas de la gente sobre la naturaleza afectan al paisaje y viceversa. Es a través de la tercera naturaleza que los residentes enmarcan sus demandas al Estado como una cuestión de justicia medioambiental, especialmente cuando el Estado protege y extrae recursos naturales

La escasez en la abundancia

Según muchas leyes latinoamericanas promulgadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el Estado es la única autoridad que posee, administra y distribuye los recursos naturales en su territorio (Lamprea Montealegre 2019). Este fundamento legal permite al Estado otorgar licencias de explotación de minerales, proteger áreas de la degradación ecológica a través de reservas y parques naturales, y crear restricciones a la tenencia de la

tierra y regulaciones de construcción por razones ambientales. Pero cuando estas leyes se aplican a espacios concretos, la cuestión de quién posee qué parte de la naturaleza y con qué fin se vuelve más compleja.

La teoría de la producción describe las protecciones medioambientales del Estado bajo una lógica de extracción capitalista de valor financiero como una “síntesis de escasez gestionada”; un ejemplo es el desarrollo sostenible. Bajo este acuerdo, el Estado sigue persiguiendo el crecimiento económico a costa de la degradación del medio ambiente, pero intenta regular algunos de los efectos negativos del desarrollo mediante leyes y otros mecanismos. Este modelo es diferente de una “síntesis ecológica”, en la que se establecen grandes limitaciones a la extracción de recursos a pesar de que el desarrollo económico puede detenerse; este tipo de acuerdo está consagrado en proyectos como el *sumak kawsay* (buen vivir) de grupos indígenas en Ecuador (Lewis 2016), así como en Colombia y Brasil (Rodríguez Garavito y Baquero Díaz 2020).

En La Calera, los residentes ven abundantes recursos ecológicos a su alrededor, pero las regulaciones del Estado y su gestión de esos recursos —ya sea por razones económicas o ecológicas— crean una escasez artificial, una “escasez en la abundancia”, tanto para los recién llegados como para los de toda la vida. Las normativas estatales impiden que los residentes disfruten del acceso al agua potable y a los espacios verdes que les rodean “en la naturaleza”, al tiempo que permiten a los capitalistas, a menudo en colaboración con el Estado, extraer valor financiero de ellos. Un claro ejemplo de esto es la infraestructura del agua: aunque La Calera está situada en un ecosistema de páramo (Guhl 1995) —un componente clave del ciclo de producción del agua en el país— el Estado no proporciona suficientes tuberías y bombas para llevar agua potable a todos los hogares. Además, el Estado contrata a empresas privadas o público-privadas para vender agua limpia a los residentes. Mientras tanto, la empresa Coca-Cola tiene licencia para explotar algunas de las cuencas hidrográficas de esta zona para la marca de agua embotellada que vende en la ciudad y en todo el país.

En otras palabras, a pesar de la abundancia de agua limpia en La Calera, el Estado induce la escasez al negar a los hogares y a los individuos el acceso a ella y obligarlos a comprarla a una empresa transnacional que tiene un permiso estatal para explotar las fuentes de agua en la zona.

En cuanto a la tierra, la escasez inducida por el Estado proviene de la modificación de las leyes de zonificación para acomodar el desarrollo de un megaproyecto que también beneficiará al Estado y a sus socios favorecidos del sector privado. A través de varias regulaciones, el Estado designó ciertos lotes de tierra en La Calera y sus alrededores como reservas naturales —lo que significa que no puede haber ninguna intervención construida en ellas— lo que impidió el desarrollo de la tierra en la zona. Sin embargo, el Estado mantuvo las instalaciones de almacenamiento de cemento de la empresa transnacional Cemex en una zona en la que los usos industriales están prohibidos según las leyes de zonificación y las normas medioambientales vigentes. Luego, el Estado utilizó esa tierra protegida para construir parques y depósitos de agua para los residentes que viven fuera de La Calera, y así indujo otra forma de escasez en la abundancia, en términos de qué tierra puede ser desarrollada, para qué propósitos y para el beneficio de quién.

Como protector de la naturaleza y motor de la escasez en La Calera, el Estado es un actor clave en la política local. Dada la importancia ecológica de la región, cerca de un tercio de la superficie del municipio fue declarada reserva natural a través de mecanismos legales como el Parque Natural Chingaza en 1977 y organismos como la Corporación Autónoma Regional (CAR) en 1993. Sin embargo, con la aprobación y ayuda del Estado, el gran capital sigue extrayendo recursos a través de Cemex, Coca-Cola y otras empresas privadas. En el ámbito residencial, la gestión de la escasez ha sido más fragmentada. Ha habido algunos promotores privados que han construido comunidades cerradas, pero la mayor parte de los recién llegados a La Calera son personas que compran parcelas individuales a los antiguos propietarios y construyen sus propias casas.

Los sociólogos y geógrafos ambientales han denominado a esta doble función “Estado ambiental”, pero cada disciplina se centra en una escala diferente. Por un lado, los sociólogos entienden el Estado ambiental desde una perspectiva de nivel macro. Siguiendo a Gould (1994) y a Schnaiberg, Pellow y Weinberg (2000), algunos Estados tienen objetivos contradictorios cuando persiguen el desarrollo sostenible y el crecimiento económico al mismo tiempo. Por ello, el Estado quiere discursivamente proteger el medio ambiente a través de ciertas normas y leyes, pero tiene poco interés en hacerlas cumplir cuando no hay recursos económicos para ello o cuando la extracción de recursos naturales se presenta como una oportunidad más rentable. Así, la lógica económica triunfa sobre la protección de los recursos

naturales y crea así una “síntesis económica” (Schnaiberg y Gould 1994) y retira aún más bienes ecológicos y añadiendo males ecológicos. En esta perspectiva descendente, el Estado establece regulaciones ambientales que tienen un impacto mínimo en los objetivos económicos, especialmente en proyectos industriales a gran escala como la producción de cemento.

Por otro lado, los geógrafos críticos ven el Estado ambiental en escenarios de nivel micro y argumentan que hay una ambivalencia estatal en cómo regula las relaciones sionaturales (Asher y Ojeda 2009, Nightingale 2018). Por ejemplo, Camargo y Ojeda (2017) estudian el caso del norte de Colombia, donde las políticas estatales de mitigación del cambio climático permiten tanto la aparición del Estado a través del despojo como su desaparición a través del abandono. En otras palabras, al perseguir un objetivo ambiental, el Estado puede desplazar a los residentes locales y no ofrecerles alternativas residenciales o económicas. En el fondo, se trata de un proceso de creación de Estado en el que el Estado se convierte en gestor de los recursos y derechos económicos y naturales debido a su interés en la expansión económica y el dominio sobre las personas, los territorios y la naturaleza. En este proceso ascendente, los diferentes niveles de las jurisdicciones estatales pueden convertirse en espacios de impugnación de las políticas económicas nacionales, por ejemplo, cuando los concejales con conciencia ambiental presionan a una ciudad para que aplique algunas normas ambientales ya aprobadas por el nivel nacional.

En La Calera, la escasez inducida es una estrategia del Estado para el despojo y para mantener recursos ecológicos específicos para determinados actores (como las grandes industrias que allí se alojan) y esto permite nuevas oportunidades políticas para que los residentes impugnen este proyecto. En otras palabras, la escasez y el crecimiento de la población en La Calera han ejercido presión sobre los recursos disponibles y han creado una paradoja de crecimiento. Los recién llegados quieren disfrutar del agua limpia y potable de los embalses de la zona, pero se ven obligados a engancharse a las redes de los más antiguos, que no son de la mejor calidad y no cuentan con apoyo estatal para el tratamiento del agua. Una paradoja similar ocurre con el suelo, cuando tanto los recién llegados como los residentes de larga data ven que hay abundante tierra a su alrededor, pero se enfrentan a restricciones en los permisos de construcción por razones ecológicas. El aumento de residentes más ricos también plantea una paradoja de crecimiento por razones de seguridad: han construido casas

para disfrutar de la tranquilidad del campo, pero ahora, al haber más carreteras y casas más ricas, hay más robos y más necesidad de protección policial.

Debido a estas presiones, los recién llegados y los de toda la vida podrían recurrir a la competencia o a la colaboración. La Calera muestra que esta última vía puede tomarse a pesar de las diferentes posiciones de clase porque los residentes comparten objetivos similares (agua limpia, espacios verdes, seguridad) y se enfrentan a un obstáculo común (el Estado). El estudio de las relaciones que crean los recién llegados y los residentes de larga data sugiere que las cuestiones medioambientales pueden salvar las divisiones de clase cuando se enfrentan a un Estado que no responde. La tercera naturaleza es útil para entender estas relaciones, especialmente si se tiene en cuenta “la naturaleza de quién” y “la cultura de quién” —tomando las palabras de la geógrafa Cindi Katz (1998)— se impone, se discute o se descarta. En La Calera, ninguno de los dos grupos residenciales tiene el monopolio de la primera o la segunda naturaleza, pero la tercera naturaleza les permite colaborar a pesar de sus diferentes posiciones de clase. Pero las diferencias de poder entre ambos grupos residenciales dan lugar a diferentes privilegios ambientales que examino en la siguiente sección.

Privilegios medioambientales y relaciones entre clases

La naturaleza no es una palabra neutra; diferentes actores la llenan de diferentes contenidos dependiendo de la clase, la raza, el poder y otras características (Castree y Braun 2001; Williams 2003; L. M. Harris 2014). Esas posiciones, a su vez, se ubican en jerarquías sociales que determinarán qué grupo tiene el poder de definir qué es la naturaleza para los demás. Además, en los últimos años, los discursos ecológicos se han convertido en un vehículo para reforzar las desigualdades existentes o desplazar a las personas a espacios indeseables o de riesgo. Tal es el caso de la zonificación urbana y los residuos tóxicos, donde las personas de clases bajas o grupos raciales discriminados terminan soportando los altos costos de vivir en espacios que amenazan su salud por la exposición a diferentes males ecológicos (Pulido 2000; Auyero y Swistun 2009; Ojeda 2012; Taylor 2014; Zeiderman 2016).

La mayoría de las discusiones sobre el privilegio ambiental se han centrado en quienes terminan recibiendo las peores consecuencias del despojo y el riesgo ambiental (para un examen crítico de estos temas en Colombia, véase Ojeda et al. 2015; Ojeda 2016). Recientemente, sin embargo, un número creciente de académicos está estudiando a “los de arriba”, al centrarse en la forma en que las élites y otros grupos poderosos utilizan la naturaleza para perpetuar o reforzar las jerarquías sociales. Un ejemplo notable es el de los sociólogos Lisa Park y David Pellow (2011), que estudian cómo los residentes blancos ricos de una ciudad turística de Estados Unidos combinan las preocupaciones medioambientales con los argumentos nativistas contra la población inmigrante. A través de este proceso, los inmigrantes son caracterizados como contaminantes y son expulsados del disfrute de los bienes ambientales de la zona, a pesar de que trabajan en el mantenimiento del entorno natural “puro” en beneficio del grupo más rico.

La relación entre el privilegio ambiental, la clase y el espacio es especialmente relevante para los estudios sobre la gentrificación verde. En los últimos años, un mayor número de ciudades están utilizando argumentos verdes para reurbanizar zonas anteriormente “café” o neutras con el fin de mejorar sus características medioambientales y, con ello, desencadenar procesos de gentrificación al desplazar a la población de toda la vida y atraer a los recién llegados más ricos que pueden permitirse los nuevos desarrollos (Dooling 2009; Quastel 2009; Anguelovski et al. 2019). Al igual que las anteriores “máquinas de crecimiento” urbano (Molotch 1976), las máquinas de crecimiento verde permiten que las coaliciones entre el Estado y los promotores desarrollen prácticas de renovación urbana excluyentes con una justificación verde (Gould y Lewis 2016).

La naturaleza también es relevante en la gentrificación rural. En el norte global, los estudiosos han señalado que surgen tensiones entre los residentes en cuanto a qué prácticas en torno a la naturaleza se consideran morales (Bell 1995) y quién, sobre una base moral, puede reclamar la propiedad de la zona (Cloke y Thrift 1987). En el sur global, sin embargo, las cuestiones que se debaten en las comunidades rurales en proceso de aburguesamiento están más relacionadas con las condiciones materiales de vida, como las infraestructuras y la tierra. En algunos casos, el Estado se alinea con los recién llegados para satisfacer únicamente sus necesidades (Timo 2017), mientras que, en otros, los recién llegados desarrollan soluciones para sí mismos, aunque sus beneficios podrían “extenderse” a otros residentes

(Nates Cruz y Velásquez López 2019). Aunque en estos y otros casos los actores poderosos utilizan la “naturaleza” y la “sostenibilidad” como una bandera políticamente neutral —¿quién diría que está en contra de las mejoras ambientales?—, su programa podría profundizar las desigualdades existentes en las zonas de clase mixta (Checker 2011).

En la gentrificación urbana, los recién llegados utilizan categorías neutrales o ideales similares para alterar el orden social. En la búsqueda de la “autenticidad”, escribe la socióloga Sharon Zukin (2010), los gustos de la población de clase media y media-alta de los barrios en proceso de gentrificación les llevan a apropiarse y, posteriormente, a cambiar los paisajes y las relaciones que los habitantes de toda la vida han construido en y sobre ellos. Sylvie Tissot (2015), otra socióloga, muestra cómo los gentrificadores de clase media blanca bien intencionados intentan mantener la “diversidad” de un barrio en Boston, pero finalmente su definición de esa categoría se convierte en un mecanismo de inclusión de algunas personas y de exclusión de otras de las decisiones políticas o de ciertos espacios. Por último, Japonica Brown-Saracino (2004), también socióloga que estudia Boston, habla de los “preservacionistas” como aquellos recién llegados que quieren proteger la diversidad existente en un barrio, pero acaban imponiendo un tipo específico de diversidad basado en líneas de clase y raza.

Los estudios sobre la gentrificación urbana destacan que las luchas por el control social en estos barrios reflejan las diferentes posiciones estéticas y políticas de los distintos grupos de residentes, que pueden convertirse en conflictos entre ellos. La socióloga Mary Pattillo (2010) examina los mecanismos de control que los negros de clase media recién llegados intentan ejercer sobre los residentes negros de clase baja en un barrio de Chicago en proceso de gentrificación, y muestra cómo comportamientos antes aceptados, como hacer un asado en la calle o arreglar los carros en el jardín delantero, no se toleran por cuestiones estéticas y de seguridad. En Nueva York, Richard Ocejo (2014) muestra cómo diferentes grupos de residentes se disputan las licencias de los bares debido a las quejas por el ruido y las molestias, y las juntas locales de la comunidad se convierten en espacios en los que los antiguos y los nuevos residentes luchan por el cambio del barrio y el aumento de los costes del alquiler.

En América Latina, la investigación sobre la integración social y la gentrificación se ve afectada por la dificultad de encontrar barrios de ingresos mixtos para estudiar. Las ciudades latinoamericanas están muy segregadas en términos de clase social (Rodríguez Vignoli y Arraigada Luco 2003). Particularmente en Bogotá, la capital colombiana, la clase (y no la raza) es el principal motor de la segregación (Villamizar Santamaría 2015) y lo ha sido durante muchos años (Aliaga Linares y Álvarez Rivadulla 2010). Aunque algunas ciudades de Colombia, como Cartagena, y de otros países tienen altos niveles de segregación racial (Telles 2004; Duarte et al. 2013; Valle 2018), la división de clases es una característica común entre las ciudades latinoamericanas, en las que las clases más altas suelen vivir en una zona en forma de cono desde el centro hasta la periferia (Sabatini 2003). Además, en un contexto tan desigual como el colombiano, en el que la desigualdad está muy tolerada, las personas de distintas posiciones de clase naturalizan las diferencias en el trato entre ellas.

A pesar de la falta de casos empíricos, algunos estudios en la región han puesto a prueba el potencial de integración entre los residentes de los barrios de ingresos mixtos. Al igual que el conocido trabajo de Teresa Caldeira (2000) sobre los muros como barreras sociales en São Paulo, los urbanistas Francisco Sabatini y Rodrigo Salcedo (2007) analizaron los efectos de la construcción de barrios cerrados de clase alta en barrios pobres de Santiago de Chile. Al igual que Caldeira, afirman que se suele pensar que los muros crean aislamiento y miedo a los demás, pero a veces, a diferencia de la investigación de Caldeira, descubren que las personas de ambos lados del muro pueden interactuar e incluso integrarse a pesar de la barrera. Diferencian entre tres tipos de integración. El primero es funcional, con una distribución de recursos entre clases (como el poder y el dinero), puestos de trabajo y derechos políticos. El segundo tipo es simbólico: existe un sentimiento de apego al lugar entre todas las clases sociales, aunque haya desigualdad social o económica. Y, por último, la integración comunitaria puede significar el fortalecimiento de los lazos interpersonales entre los residentes, por ejemplo en las amistades o los matrimonios.

A través de entrevistas en profundidad, Sabatini y Salcedo encuentran pruebas sólidas de los dos primeros tipos, pero no del tercero. Hay arreglos funcionales en el sentido de que hay nuevos puestos de trabajo en la zona, como empleadas domésticas, jardineros, carpinteros, tenderos, plomeros. Los anteriores residentes también tienen la sensación de

estar incluidos en la modernidad por la llegada de supermercados, alcantarillado, carreteras y otros tipos de infraestructuras. Los residentes ven este tipo como el que tiene efectos más beneficiosos, pero también hay cierta tensión porque esta modernización fue posterior a la llegada de los recién llegados y, por tanto, se asocia a ellos. Lo mismo puede verse en la gentrificación urbana, cuando la policía y las tiendas de comida “mejoran” después de que grupos de clase más alta y más blancos se instalen en un barrio. En la integración simbólica, los autores constatan que la gente siente menos estigmatización; tiene un mayor sentido de pertenencia al barrio que se expresa en el orgullo de vivir en él; y que ve los muros como algo natural debido a los altos niveles de delincuencia, como describe Teresa Caldeira (2000) para São Paulo. Por último, los autores afirman que no hay pruebas del tercer tipo de integración comunitaria: no hay amistad con los demás, ni vínculos fuertes, pero podría haber resentimiento.

Es importante señalar que las relaciones de clase en el subcontinente no son siempre conflictivas hacia el exterior, pero pueden implicar sentimientos paternalistas y condescendientes. Así lo observó la socióloga María José Álvarez-Rivadulla (2014) en un estudio empírico sobre las trabajadoras domésticas en Colombia y Uruguay. El país del Cono Sur es uno de los más igualitarios de la región, mientras que Colombia es uno de los más desiguales. Este entorno de gran diferencia de clases afecta a la forma en que interactúan las personas de distintas partes del espectro. Mientras que todos muestran signos de alta tolerancia a la desigualdad, las personas de clase baja parecen resignadas a aceptar este orden a pesar de no estar siempre de acuerdo con él, especialmente en lo que respecta a la injusticia de su salario, su pobreza y las desigualdades que ven al compararse con sus empleados. En el otro extremo, las personas de clase alta se relacionan con sus compañeros de clase baja de forma condescendiente, como si pudieran sentir cierta empatía hacia los pobres pero no como iguales. Estas relaciones paternalistas, que son la columna vertebral de muchos acuerdos laborales en Colombia —en trabajos de servicios poco cualificados como el trabajo doméstico o los jardineros, que es la forma en que los recién llegados emplean a los veteranos en La Calera—, implican una relación de explotación que podría influir en la forma en que se producen los acuerdos funcionales.

Dicho esto, algunos estudios realizados en el sur global apuntan a la idea de que existen posibles vías de cooperación y coalición entre residentes de distintos grupos. De

hecho, la colaboración podría surgir entre personas de diferentes posiciones para obtener servicios del Estado. Tal es el caso de El Cairo, Egipto (Singerman 1996), donde hombres y mujeres residentes de un barrio popular se unieron a través de redes informales para satisfacer necesidades básicas como ganarse el sustento o desenvolverse en las instituciones. Una historia similar de colaboración es la de El Alto, Bolivia (Lazar 2008), donde miembros de diferentes grupos ocupacionales se unen para protestar contra las reformas económicas del Estado y la privatización del agua.

Hay varias explicaciones posibles de por qué se producen estas coaliciones de conveniencia a pesar de las diferencias. Una primera observación clásica en sociología sostiene que las personas pueden unirse cuando se enfrentan a un enemigo externo (Simmel 1903). En el caso de La Calera, ese enemigo es el Estado ambiental, y el Estado era también el principal antagonista en los ejemplos anteriores de El Cairo y La Paz. Otra explicación de la formación de coaliciones proviene de las necesidades compartidas. Aunque dos grupos sean similares, pueden unirse cuando se enfrentan a los mismos retos. Estas acciones colectivas funcionan en los movimientos sociales de todo el mundo, pero La Calera no es uno: no está organizado, no hay líderes claros y los residentes no se autodenominarían así. Por último, en un contexto de desigualdad, las coaliciones pueden ser el resultado de las actitudes condescendientes de los poderosos o del interés de los de izquierdas por reducir la desigualdad. Encontré algunos indicios de ambos en La Calera, pero no fueron suficientes para explicar el cuadro completo al analizar cómo los residentes construyeron su tercera naturaleza.

La cooperación entre personas de diferentes clases puede darse incluso en contextos de aburguesamiento ecológico. Al hablar de coaliciones “lo suficientemente verdes”, Winifred Curran y Trina Hamilton (2017) sostienen que los recién llegados y los que llevan mucho tiempo en el barrio pueden unirse para respaldar las iniciativas ambientales en los espacios en vías de gentrificación. Utilizan el caso de Greenpoint, en Brooklyn, donde los residentes querían apoyar las iniciativas de limpieza de este barrio industrial y contaminado y, al mismo tiempo, proteger los puestos de trabajo existentes para que los residentes de larga data permanecieran allí y evitaran su desplazamiento. A través de estas coaliciones, los residentes locales tuvieron voz en la creación de un espacio para las mejoras medioambientales dentro de las zonas industriales, desvinculando el efecto gentrificador, de

otro modo generalizado, de tales iniciativas urbanas. En este caso, los residentes pudieron unirse porque el Estado se convirtió en el principal actor contra el que podían cooperar.

La cuestión del conflicto o la cooperación cuando se habla del privilegio medioambiental y de las relaciones entre clases sigue abierta para las zonas rurales. En La Calera, los habitantes de larga data ya habían ideado soluciones para algunas necesidades básicas, pero necesitaban que los recién llegados les ayudaran a mantener su funcionamiento, por ejemplo, al pagar por el uso de los sistemas de acueducto. Mientras tanto, los recién llegados compartían una sensación de riesgo tanto por las decisiones del Estado, como la construcción de un megaparque que traería más visitantes, como por su inercia ante la necesidad de agua potable. Al mismo tiempo, ambos grupos residenciales participaron en los debates sobre zonificación y planificación de la ciudad para evitar una mayor urbanización y exigir el cumplimiento de la normativa medioambiental vigente. La experiencia de los antiguos —y su aceptación de los recién llegados como colaboradores y aliados— les animó a desarrollar interacciones más funcionales y simbólicas, en palabras de Sabatini y Salcedo. Al igual que en El Cairo, El Alto y Brooklyn, en La Calera el Estado se convierte en un objetivo común tanto para los recién llegados como para los veteranos. Diferentes oficinas estatales tienen intereses contrapuestos —principalmente el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda—, en cuanto a la cantidad de tierra que debe protegerse de la degradación ecológica y la cantidad de tierra que puede desarrollarse para usos industriales o residenciales y, por tanto, obtener ingresos de esas actividades. A medida que el Estado induce la escasez de agua, tierra y seguridad, ambos grupos ven la oportunidad de establecer alianzas entre clases para presionar al Estado a fin de que satisfaga sus demandas.

Estas alianzas son el resultado de un proceso aditivo en el que los recién llegados y los veteranos generan una superposición de primera, segunda y tercera naturaleza. Los residentes de ambos grupos establecen relaciones de confianza entre sí en los escenarios de la vida cotidiana, y éstas se convierten gradualmente en la base de nuevas coaliciones. Los estudiosos de los movimientos sociales urbanos consideran que estas interacciones a nivel micro se convierten en la base de las acciones colectivas a nivel macro (McAdam 1988; Viterna 2006; Jasper 2014). Las interacciones pueden producirse cuando hay espacios públicos compartidos o preocupaciones compartidas entre vecinos inmediatos, con la

participación de actores humanos y no humanos (Amin 2015). En otros contextos urbanos, pueden aparecer por cuestiones de vivienda (Zheltnina 2020) o por preocupaciones ambientales (W. Curran y Hamilton 2017). En el caso de La Calera, la superposición de primera, segunda y tercera naturaleza se nutre de los diferentes tipos de interacciones entre vecinos para sostener coaliciones de conveniencia en tres sitios clave de conflicto ambiental: (i) las infraestructuras, (ii) el suelo, y (iii) el urbanismo.

En primer lugar, en las infraestructuras es donde se pueden ver los ejemplos más materiales de esta superposición. La zona es rica en fuentes de agua dada su estructura ecológica, pero la intervención humana —en forma de tuberías, embalses, plantas de tratamiento— fue necesaria para llevarlas tanto a los recién llegados como a los hogares de los antiguos. El estudio de la infraestructura de un nuevo suburbio es importante porque permite el crecimiento de la población y determina quién puede beneficiarse de los recursos (Filion y Pulver 2019). Las infraestructuras condensan la secuencia de formación de las diferentes capas de la naturaleza y cristalizan el papel de los diferentes grupos de personas en este proceso.

La segunda superposición de capas de naturaleza se produce a través de la tierra. Cuando un lote puede utilizarse simultáneamente para la agricultura y la vivienda, se crea una tensión sobre qué tipo de naturaleza pueden imponer los residentes. Mientras que los antiguos utilizan la naturaleza sobre todo para la producción, los nuevos la utilizan sobre todo para el consumo, y la cuestión de qué naturaleza alimentará la rueda de la producción da lugar a normativas medioambientales y otras normativas legales que crean una tercera naturaleza. Además, cuando se designó una amplia zona para convertirla en un parque ecológico, los residentes se mostraron preocupados porque sus necesidades no se tuvieron en cuenta en los diseños y los planes pondrían en peligro su ecosistema natural compartido. Estas discusiones tienen como núcleo una cuestión de gobernanza común a los nuevos suburbios (Hamel y Keil 2015): los intereses de quién se impulsan y en qué circunstancias. Las disputas sobre los usos del espacio reflejan los variados valores que la naturaleza tiene para diferentes personas, dónde se movilizan y qué espacios crean.

Por último, de todos los lugares en los que interactúan veteranos y recién llegados en cuestiones medioambientales, la planificación es donde los residentes mostraron una mayor cooperación; la planificación también consolida la importancia de la tercera naturaleza.

Cuando realicé el trabajo de campo, en La Calera se estaban celebrando las reuniones participativas obligatorias para un nuevo plan de ordenamiento, al que los residentes se oponían firmemente por motivos ambientales. En contra de un mayor crecimiento urbano, los recién llegados y los que llevan mucho tiempo en la zona recurrieron a las imágenes de la tercera naturaleza para hacer oír su voz a la hora de hacer cumplir la normativa medioambiental y cerrar la puerta a los nuevos habitantes que podrían terminar de devorar el paisaje verde que quedaba. Al final, fue gracias a la superposición de capas de naturaleza y a la escasez inducida por el Estado que los residentes pudieron mantener coaliciones “lo suficientemente verdes”.

Pensadores como Henri Lefebvre (2014) nos recuerdan que la nuestra es una sociedad urbana que debería abandonar la dicotomía entre lo urbano y lo rural, un llamado que inspiró al sociólogo Neil Brenner a argumentar que vivimos bajo un proceso de “urbanización planetaria” (Brenner 2014). Lo importante es pensar en el proceso de urbanización más que en el objeto —una ciudad, un campo— que se urbaniza. Siguiendo esta lógica a través de las capas de naturaleza de Cronon, podemos examinar críticamente el papel de la naturaleza en la urbanización, especialmente en América Latina y otras regiones del sur global donde la naturaleza y sus defensores están fragmentados y disputados. Si vemos que la primera, segunda y tercera naturaleza se superponen en los efectos de la expansión urbana en el campo, podemos observar las diversas formas en que los seres humanos se relacionan con el medio ambiente, especialmente cuándo y cómo eligen la cooperación sobre la competencia. En ese sentido, la luz que arroja el estudio de las relaciones interclase y la escasez inducida por el Estado se refracta a través del prisma de la naturaleza. Examinar cómo los residentes de La Calera entienden la naturaleza para construir coaliciones contra el Estado es el enfoque central de esta disertación. Utilizo la observación participante, las entrevistas y la investigación de archivos para rastrear las relaciones entre los campesinos veteranos y los recién llegados de clase media-alta en diferentes escenarios de la tercera naturaleza.

Mudarse a La Calera

Al haber crecido sobre todo en Bogotá, mis primeras experiencias en La Calera fueron de consumo y ocio. Cuando tenía unos 10 años, recuerdo haber ido a La Mazorca, un

restaurante que todavía vende fritanga, una especie de asado colombiano con papas criollas y sabaneras fritas, plátanos, arepas y diferentes cortes de carne. Se trata de un plato tradicional de la zona, pero las familias de clase media como la mía iban a las afueras de Bogotá para comer este plato en un entorno “campestre/rústico”: troncos como asientos, cestas como platos, sin cubiertos y grandes campos de pasto para jugar con otros niños o mascotas. Más tarde, cuando era adolescente, a mediados de la década de 2000, las discotecas y bares de la carretera de La Calera estaban “de moda” y los jóvenes acudían a Compostela, Massai, Samerón y otros locales para celebrar proms, pre-proms y fiestas en general.

Mi primer contacto con La Calera residencial, sin embargo, fue en 2012. Un amigo del trabajo se había mudado allí el año anterior con su familia, e invitó a algunos colegas a un asado. Como estaba a las afueras de Bogotá, tendríamos que tomar un bus intermunicipal o un carro, que me prestaron mis papás. Fui en carro con unos amigos, por primera vez sin mi familia y después de mucho tiempo de no ir a La Calera (las discotecas “de moda” ya se habían trasladado a otras zonas dentro de Bogotá, sobre las que escribí mi tesis de pregrado). No tenía una idea clara de lo que me esperaba, pero rápidamente noté nuevas casas de lujo en la carretera y en las montañas, muy diferentes de las casas y ranchos de estilo campesino que conocía de antes. Después de perdernos un poco en la carretera, acabamos llegando a una casa de dos pisos de estilo moderno, con grandes ventanas, una chimenea, un jardín enorme en la parte delantera y cuatro perros (algunos callejeros, otros de pura raza) que corrían saludando y asustando a los huéspedes, y una vaca en la parte de atrás.

En conversaciones con los padres de mi amigo, les pregunté por qué se habían mudado allí. En mi opinión, La Calera estaba demasiado lejos y era demasiado fría, aunque el paisaje era muy bonito. Me dijeron ahí —y lo repitieron unos años después— que les gustaba el espacio abierto, el aire limpio y la tranquilidad, y que Bogotá era demasiado “caótica” (notas de campo, enero de —ellos querían tener una. En una visita posterior allí, recorrimos en cuatrimoto las carreteras destapadas de las veredas, y me di cuenta de que el cambio arquitectónico iba más allá de la carretera principal, hacia zonas más remotas, aisladas y rurales, más adentro de las montañas.

Esta constatación se profundizó cuando mis papás decidieron buscar una casa allí. Estaban vendiendo su casa en un barrio de clase media de Bogotá, Cedritos, porque yo me

mudaba a Nueva York y mi hermano se casaba. En Colombia es muy común que los hijos vivan con sus padres hasta los 30 años más o menos, cuando se mudan con sus cónyuges o se van de la ciudad, como fue el caso de mi hermano y mío. Mis papás no podían permitirse comprar un nuevo apartamento o una casa de tamaño similar en el mismo barrio, así que pensaron en probar en las afueras. Por esa época, además, estaba tomando una clase de Naturaleza y Sociedad para mi maestría en Geografía en la Universidad de los Andes, donde leíamos textos de ecología política. Estas lecturas me abrieron los ojos al nuevo mundo de mercantilización de la naturaleza que estaba viendo mientras acompañaba a mis papás en la búsqueda de una nueva casa.

La primera vez que fuimos juntos a La Calera vi el cartel publicitario en la carretera sobre los nuevos vecinos “de la naturaleza”. Esas casas estaban lejos del presupuesto de mi familia, así que descartaron vivir en una de ellas. Sin embargo, les seguía entusiasmado la idea de vivir en el campo, cerca de Bogotá, y encontraron una agente que les ayudó a encontrar un lote donde construyeron su actual casa.

Adriana, la agente, lleva casi quince años vendiendo terrenos y casas en La Calera. Ella nació y creció en una de las veredas, pero el negocio ha estado lento en los últimos dos años porque “la tierra está muy cara ahora” (entrevista, enero de 2019). Ella les vendió a mis papás un terreno que era una subdivisión de una antigua finca, que ahora se estaba convirtiendo en un callejón sin salida como muchos otros en La Calera. El propietario original de la finca subdividida murió y uno de sus hijos vendió los lotes resultantes porque era un mejor negocio que mantener la finca improductiva, y así maximizar el valor de cambio de la naturaleza a través de la venta de tierras.

Mis papás hicieron el trazado y el diseño, y contrataron a un arquitecto para que hiciera los cálculos de las estructuras, materiales y demás especificaciones. También contrataron a diferentes trabajadores de la construcción a lo largo de todo el proceso a través de referencias: alguien conocía a un tipo que era muy bueno con la electricidad, él a su vez conocía a alguien que tenía un negocio de paneles de yeso, ella conocía a otra persona que era genial con las baldosas de cerámica, y así sucesivamente. Aunque disponían de suficiente dinero de la venta de su casa anterior, mis papás tuvieron que pedir un pequeño préstamo para pagar los acabados; entre los errores de cálculo de los materiales y las condiciones imprevistas (la lluvia, por ejemplo) que impidieron un flujo de trabajo constante, el proyecto

de construcción se salió del presupuesto. En total, desde la firma del título de propiedad, pasando por la obtención de los permisos (licencia de construcción, punto de origen del acueducto, conexión eléctrica, etc.), hasta la construcción propiamente dicha de la casa, pasaron unos dos años. Pero, al final, mis papás se convirtieron en los nuevos vecinos, no en la “naturaleza”. Y esa constatación fue la clave para reflexionar sobre mi posición en el campo como recién llegado y como investigador.

Para este proyecto, utilicé un enfoque cualitativo dividido en cuatro partes. Para entender cómo la gente utiliza el entorno para crear coaliciones, es importante ver, escuchar y reflexionar sobre cómo interactúan. Aunque quería incluir un componente cuantitativo de los cambios en el paisaje y la tenencia de la tierra a través de la cartografía, las fuentes disponibles en Colombia no eran lo suficientemente buenas para esta tarea. Mis datos cualitativos, por el contrario, vinieron de varios años de rico trabajo de campo cuando llevé a cabo (i) una etnografía de la vida cotidiana en el pueblo y la observación participante en las reuniones de la comunidad, (ii) entrevistas en profundidad con diferentes tipos de residentes; (iii) una etnografía digital del uso de los residentes de los medios sociales; y (iv) la investigación de archivo en las actas del consejo de la ciudad. La investigación fue aprobada por el Comité de Ética de CUNY.

Para entender cómo interactuaban las personas, primero tenía que ver cómo lo hacían. Debido al calendario semestral de la universidad, sólo pude vivir allí un par de meses seguidos. Pasé la mayor parte de las vacaciones de verano e invierno en la casa de mis padres desde 2015 hasta 2019 en La Calera, con algunos períodos prolongados en 2017 y 2018. En total, viví allí casi veinte meses. Las etnografías son importantes porque permiten al investigador observar cómo hace las cosas la gente en lugar de confiar solo en su palabra, y esto era especialmente clave para mi proyecto porque no paraba de escuchar que la gente se llevaba bien con sus vecinos en general. Mi hipótesis inicial, basada en la investigación sobre la desigualdad medioambiental, era que habría profundas luchas entre los recién llegados y los veteranos en torno a los usos de la naturaleza, pero descubrí una historia diferente al relacionarme con mis vecinos, cuando asistí a reuniones sociales y comunitarias, y al ver lo que ocurría en la plaza principal, en las tiendas y en otros lugares de posibles interacciones.

Durante esos meses, hice observación participante en diferentes escenarios. Asistí a reuniones “barriales” en las que se discutía la delincuencia y la seguridad, a sesiones del

concejo municipal en las que se discutían proyectos de acueducto, y a reuniones de toda Calera en las que se discutía el nuevo POT y el proyecto del parque San Rafael. Algunos de mis vecinos me invitaban a sus casas a tomar onces u hornear pizzas, y los invitábamos a fiestas de cumpleaños y otros eventos en la casa de mis papás. Fueron los diferentes encuentros que tuve con la gente en las tiendas, las cafeterías, los puestos de arepa campesina junto a la carretera y en sus propias casas, los que informaron y enriquecieron este proyecto. A través de sus historias familiares, sus frustraciones con la administración actual, los movimientos de ojos y las expresiones faciales, que sugieren tensiones tanto explícitas como implícitas, pude tener una mejor comprensión de lo que están enfrentando, cómo están lidiando con ello, específicamente, cómo navegan viviendo en una ciudad rural en rápida urbanización que enfrenta el cambio ambiental. En total, participé en 15 de estas reuniones, que iban desde unas dos horas hasta talleres de medio día. En ellas, vi participar a personas de ambos grupos de residentes y, lo que es más importante, no vi ningún conflicto entre ellos en estos espacios de toma de decisiones tan politizados y cruciales, a diferencia de lo que vieron otros estudiosos en sus investigaciones sobre la gentrificación. De hecho, el conflicto que observé en estos espacios era por parte de ambos grupos que actuaban juntos contra el Estado.

Los etnógrafos casi siempre juegan con la idea de ser un extraño interno. En mi caso también fue así, porque, aunque soy colombiano, no crecí en La Calera y mi residencia en la zona fue esporádica. Al principio me veían como un triple extraño. La gente no entendía por qué estaba en todas esas reuniones y lugares. Dada mi forma de hablar y mi aspecto —mi *habitus*, en términos de Bourdieu (1984)—, tanto los recién llegados a La Calera como los que llevaban mucho tiempo en ella me consideraron primero como uno de los recién llegados de clase media-alta. En las reuniones de la comunidad, la gente me confundía con un funcionario de la empresa de acueducto de Bogotá o con uno de los consultores del POT porque era una cara nueva —y tenía apellidos desconocidos— en la zona. Finalmente, cuando expliqué que estaba “estudiando en la ciudad de Nueva York”, mis informantes se mostraron más abiertos a discutir diferentes asuntos porque me veían como una parte más neutral y que, como escuché decir a alguien en una reunión comunitaria, “está poniendo el nombre de La Calera” (notas de campo, enero de 2018). Fue este último papel el que utilicé para

presentarme después de las reuniones y en otros lugares, y la gente empezó a reconocermme como “el de la tesis del doctorado”.

Fue en esas reuniones y encuentros donde también encontré a la mayoría de mis entrevistados. En total, entrevisté a 45 personas, entre las que se encontraban residentes nuevos y antiguos, funcionarios municipales y concejales (véase el Apéndice 1 para un resumen de la muestra). Por lo general, entablaba una conversación con uno de ellos al terminar las sesiones, y ellos me presentaron a otras personas para que las entrevistara, lo que en investigación cualitativa se llama muestreo de bola de nieve. Hice preguntas a los residentes sobre sus motivaciones para mudarse a La Calera, los cambios que vieron en la zona en los últimos años, los retos a los que se enfrentan, las batallas que han ganado y su relación con los vecinos. A los funcionarios públicos les pregunté sobre los programas que estaban implementando y, como también eran residentes, incluí también algunas de las preguntas anteriores. Las entrevistas me ayudaron a reconstruir la situación local a medida que cambiaba con el tiempo; evidentemente, mi etnografía estaba limitada a un marco temporal concreto, y estas entrevistas me permitieron preguntar sobre el pasado. Con ello, también pude comparar lo que me decían los entrevistados y lo que confirmé en las reuniones de la comunidad sobre cómo se unen para exigir servicios al Estado.

Junto a este trabajo, también realicé una etnografía digital en diferentes grupos de Facebook y WhatsApp (Varis 2016; Murthy 2008). Esta conexión digital me permitió mantener mi presencia (virtual) en el lugar de la investigación cuando estaba (físicamente) en NYC. En total formé parte de cinco grupos, incluyendo dos centrados en temas generales de la ciudad y tres más específicos que trataban sobre la seguridad en mi vereda y el proyecto del parque de San Rafael. Estos grupos incluían a más personas que las reuniones físicas en ocasiones y eran más diversos en cuanto a tiempo de residencia en La Calera, incluidos tanto a los recién llegados como a los que llevaban mucho tiempo. En ellos, pude ver más interacciones en tiempo real entre los residentes y, dada la naturaleza más inmediata de este tipo de comunicaciones, la gente se mostraba más desenvuelta en sus intercambios. Eso no quiere decir que en las reuniones físicas no hubiera discusiones muy acaloradas; pero a veces la gente no podía hablar porque había demasiadas intervenciones o algunas voces eran más fuertes que otras. En las salas de chat y en los mensajes de Facebook, todas las voces tienen un peso más equitativo, al menos eso parece, en la pantalla del ordenador. Este método fue

especialmente útil porque me permitió seguir investigando incluso bajo las restricciones de covid-19 que impedían viajar.

La última estrategia metodológica que utilicé para estudiar la transformación de los estratos de la naturaleza en La Calera y la escasez inducida por el Estado fue la de los archivos. Debido a que las primeras llegadas de los recién llegados a La Calera se remontan a unos treinta años atrás, era importante para mí tener una visión más histórica de cómo el pueblo lidió con su llegada. Para ello, las reuniones de la alcaldía son clave, ya que es en ese espacio donde se toman muchas decisiones relativas a las normas de zonificación o a la asignación de recursos —que afectan a la forma en que los residentes, las empresas y otras personas compran y venden terrenos—, y también pude rastrear las conversaciones que la gente mantenía en la zona antes de mi llegada. Dadas las limitaciones de mantenimiento de registros, así como de acceso, pude obtener actas a partir de 2011, que es también cuando empezaron a guardarlas digitalmente, justo después de que la ciudad aprobara el nuevo programa de planificación y zonificación que está activo hasta hoy.

La codificación y el análisis de estos cuatro tipos de datos me permitieron entender los espacios sociales e institucionales donde aparecieron las coaliciones y la importancia de la naturaleza en ellas. Mi propia experiencia en La Calera fue el resultado de las diferentes capas de naturaleza puestas sobre el agua, la tierra y el poder del paisaje en el pueblo. Mi familia formaba parte del grupo que ejercía presión sobre las infraestructuras existentes, pero que también quería construir una comunidad con los de toda la vida, de forma muy parecida a los “buenos vecinos” descritos por Sylvie Tissot (2015). Inevitablemente, hubo tensiones entre los recién llegados y los veteranos en relación con las quejas por el ruido y otras molestias, como describo en el capítulo 3. Sin embargo, a diferencia de los vecinos de Tissot, mis papás y otros recién llegados a su vereda participaban activamente en conversaciones con los veteranos que daban lugar a una colaboración entre clases frente a las instituciones en lugar de una competencia por los recursos. Y este hallazgo es en sí mismo importante para un país como Colombia, con su historia de desigualdad de clases y guerra civil, así como para un público más amplio interesado en los procesos de urbanización en el Sur global.

Resumen de los capítulos

Esta tesis está dividida en seis partes. En el primer capítulo, la introducción, hablé de la importancia de La Calera como lugar donde personas de diferentes clases utilizan argumentos de la tercera naturaleza para impugnar la escasez inducida por el Estado en la abundancia de recursos naturales. Exploro este hallazgo en los siguientes cinco capítulos empíricos. Los siguientes capítulos están organizados utilizando una lógica de escala —desde las microinteracciones hasta los macroprocesos más amplios— que muestra el carácter aditivo de los acuerdos medioambientales.

El capítulo 2 presenta el contexto general de La Calera, y se centra en su importancia ecológica en la región y en las formas de uso de la naturaleza por parte de los recién llegados y de los que llevan mucho tiempo en ella. Aquí exploro las diferencias entre la naturaleza para la producción y la naturaleza para el consumo para los residentes de larga data y los recién llegados, respectivamente, que crean una relación diferente entre ellos y los recursos ambientales locales. Además, presento ambos grupos de residentes y los tipos de interacciones comunitarias que desarrollaron.

En el capítulo 3, examino las relaciones específicas y conflictivas entre los grupos de residentes en cuanto a la tercera naturaleza. En primer lugar, muestro que la idea de “conciencia ecológica” de los recién llegados contrasta con las prácticas ecológicas de los veteranos, lo que crea lugares de disputa entre los vecinos. En segundo lugar, analizo cómo los antiguos utilizan esas disputas para hablar de la imposición de nuevas prácticas “verdes” y del desplazamiento. Hasta aquí, estos hallazgos hacen eco con lo que encontraron los estudios anteriores sobre gentrificación, pero abre el camino a nuevos tipos de acuerdos entre residentes por razones ambientales más allá de las microinteracciones.

El capítulo 4 se centra en la primera y segunda naturaleza, especialmente en las luchas por la infraestructura del agua. A pesar de las abundantes fuentes de agua, muchos residentes de la zona rural de La Calera carecen de acceso a acueductos y tuberías de aguas residuales. En parte, esto se debe a las regulaciones medioambientales que impiden el uso ilimitado del agua, pero otra parte se debe al monopolio del Estado sobre un gran embalse situado en La Calera pero que abastece a Bogotá. Esta falta de apoyo estatal en la infraestructura local para

el agua llevó a los residentes de larga data a crear acueductos comunitarios autogestionados, pero los de larga data acogieron o permitieron que los recién llegados se unieran a ellos por su sostenibilidad financiera y ambiental. Esta paradoja del crecimiento es el resultado de cómo el Estado induce la escasez en una zona con abundantes recursos hídricos.

Llevando la discusión del agua a la tierra, el capítulo 5 presenta el desarrollo del Parque Ecológico San Rafael como una forma de cristalizar la tercera naturaleza. Este megaproyecto se viene gestando desde 1993, cuando se construyó el reservorio de agua descrito en el capítulo anterior. Los habitantes se enteraron de los nuevos diseños de este parque en una reunión casi por accidente, lo que los llevó a presionar tanto a la Alcaldía de La Calera como a la de Bogotá para que crearan un mecanismo de participación en el que pudieran expresar sus inquietudes. Tras comprobar que el parque se iba a construir a pesar de sus reiterados esfuerzos por hacerlo viable tanto desde el punto de vista medioambiental como económico para los habitantes de La Calera, una demanda judicial paralizó el proyecto por motivos ecológicos. En este caso, la tercera naturaleza queda ejemplificada por el uso que los residentes hacen de las imágenes y los ideales que afectan a las intervenciones y los recursos existentes.

El último y más fuerte ejemplo de creación de coaliciones se analiza en el capítulo 6. Los debates de planificación en una ciudad rural en proceso de urbanización son un lugar clave para entender qué tipo de naturaleza quieren los residentes. Aquí, ambos grupos de residentes mostraron sentimientos contrarios al crecimiento urbano y una desconfianza hacia las autoridades estatales, lo que llevó a una respuesta más cohesionada en los mecanismos de planificación participativa para exigir al Estado que hiciera cumplir la normativa medioambiental. Al igual que antes, fueron las opiniones compartidas de los residentes sobre la tercera naturaleza las que permitieron que existiera esta coalición para proteger el medio ambiente en documentos legales como los planes de zonificación.

Por último, termino este texto examinando los diferentes significados de la “naturaleza” en La Calera. A pesar de los diferentes usos de la naturaleza, los residentes de La Calera le atribuyen significados similares: una tercera naturaleza compartida. La urbanización del campo crea tipos particulares de naturaleza que pueden ser disputados; y después de la covid-19, mucha gente está dejando las ciudades para buscar una vida en la

naturaleza con más espacio abierto. En La Calera, eso puede crear coaliciones entre personas de diferentes clases contra un Estado que no proporciona suficientes servicios a una población cada vez más preocupada por los daños medioambientales y el cambio climático.